

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 70

O R D I N A R I A

LUNES 21 DE JUNIO DE 2010

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con cuarenta minutos del lunes veintiuno de junio de dos mil diez, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar Sesión Pública Ordinaria, los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José de Jesús Gudiño Pelayo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. El señor Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia no asistió a la sesión por encontrarse desempeñando funciones inherentes a su cargo.

Dada la ausencia del señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia, el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, primero en el orden de designación en relación con los demás señores Ministros presentes y con fundamento en los artículos 13 y Décimo Primero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presidió la sesión.

El señor Ministro Presidente en funciones Aguirre Anguiano abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. INCIDENTE DE INEJECUCIÓN 882/2009

I. 882/2009

Incidente de inejecución 882/2009 de la sentencia dictada el veinte de abril de dos mil nueve, por el Juez Décimo Sexto de Distrito en el Distrito Federal en Materia Administrativa, en el juicio de amparo 274/2009, promovido por *****. En el proyecto formulado por el señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo se propuso: *“PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia a que este toca se refiere. SEGUNDO. Quedan inmediatamente separados de sus cargos los siguientes titulares, con relación a los puestos públicos que se mencionan: 1. Integrantes del Consejo de Honor y Justicia, y 2. Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. TERCERO. Consígnese a las personas mencionadas en el punto resolutivo que antecede, directamente ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal en turno, por el desacato a una sentencia de amparo de acuerdo con lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a fin de que sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 208 de la Ley de Amparo. CUARTO. Para los efectos mencionados en el último considerando de esta resolución, déjese el presente incidente de inejecución de sentencia abierto y requiérase a las autoridades ahí señaladas el cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos especificados”*.

A consulta del señor Ministro presidente en funciones Aguirre Anguiano, el secretario general de acuerdos informó que mediante escrito recibido el dieciocho de junio de dos mil diez en la Oficina de Correspondencia y Certificación Judicial de este Alto Tribunal relativo al incidente de inejecución 882/2009 de la sentencia dictada el veinte de abril de dos mil nueve por el Juez Décimo Sexto de Distrito en el Distrito Federal en Materia Administrativa, en el juicio de amparo 274/2009, promovido por *****, en la cual se determinó que “la autoridad responsable dé inmediato cumplimiento a la resolución dictada por la Primera Sala Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en el juicio de nulidad A-4463/2006”, el licenciado *****, Subdirector de lo Contencioso Laboral y Elementos Policiales, en ausencia del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, acompañó resolución emitida el diecisiete de junio de dos mil diez, por la autoridad responsable, en el expediente CHJ/1501/06 relacionado con el juicio de nulidad A-4463/2006 en la cual se sostiene: “a efecto de cumplimentar en sus términos la sentencia antes citada, gírese atento oficio a la Dirección General de Recursos Humanos para que en el ámbito de su competencia reinstale a ***** en el puesto o cargo que desempeñaba con anterioridad a la sanción impuesta por este órgano Colegiado, asimismo le deberán ser pagadas las prestaciones y haberes que dejó de percibir desde que fue suspendido preventivamente y hasta que sea reinstalado, para lo cual remítase copia constatada del presente

Sesión Pública Núm. 70

Lunes 21 de junio de 2010

proveído”, señalando que aparentemente con esta constancia se da cumplimiento a la respectiva sentencia de amparo.

El señor Ministro Gudiño Pelayo propuso que, ante la documentación recibida en este Alto Tribunal, es conveniente retirar el presente incidente de inejecución con el objeto de remitirlo al Juzgado de Distrito del conocimiento para que se pronuncie sobre el debido cumplimiento del respectivo fallo protector, lo que se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño Pelayo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente en funciones Aguirre Anguiano.

II. APROBACIÓN DE ACTAS

Proyectos de actas de las sesiones públicas números 68, ordinaria y 69, extraordinaria, celebradas el martes quince y el miércoles dieciséis de junio de dos mil diez, en sus segmentos matutino y vespertino.

Por unanimidad de diez votos el Tribunal Pleno aprobó dichos proyectos.

III. DIVERSOS ASUNTOS LISTADOS PARA LA PRESENTE SESIÓN

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto:

III.1 2/2007

Solicitud de modificación de jurisprudencia 2/2007 formulada por el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón respecto de la tesis identificada con el número P./J.55/2001, de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PROMOVIDA POR EL GOBERNADOR DE UN ESTADO EN CONTRA DE UN DECRETO DENTRO DE CUYO PROCESO LEGISLATIVO NO HIZO VALER EL DERECHO DE VETO. ES IMPROCEDENTE POR NO AGOTAR LA VÍA LEGALMENTE PREVISTA PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO, ASÍ COMO POR CONSENTIMIENTO”. En el proyecto formulado por la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas se propuso: “*ÚNICO. Es improcedente la Solicitud de Modificación de Tesis de Jurisprudencia, formulada por el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón*”.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas expuso una síntesis de las consideraciones de su proyecto en cuanto sustentan la propuesta contenida en el punto resolutivo, ya que la modificación de jurisprudencia en la materia, constituye el pronunciamiento jurídico sobre un problema específico, se modifica, supera o abandona, con

un solo pronunciamiento en contrario, realizado en la resolución de un asunto diverso al en que primeramente se haya sustentado una postura jurídica, de manera que lo que resulta obligatorio en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad son las consideraciones que sustentan los fallos aprobados por cuando menos ocho votos, de tal manera que aun cuando no se haya redactado la correspondiente tesis, ello no releva de obligatoriedad a esos criterios, por lo que el criterio obligatorio en el caso es el sustentado al resolver la controversia constitucional 84/2004-PL.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó de acuerdo con el proyecto proponiendo que se citara el precedente relativo a la solicitud de modificación de jurisprudencia 5/2007-PL, toda vez que en ese asunto se convino que la solicitud de modificación de jurisprudencia no es la vía adecuada para modificar los precedentes sostenidos en una controversia constitucional y estimó que basta con esa razón de improcedencia, pues las señaladas en el proyecto a partir de la foja diecinueve podrían generar confusión, por lo que propuso eliminarlas.

El señor Ministro Franco González Salas indicó que algunos de los señores Ministros se han separado de la forma en que se están manejando en algunos asuntos los criterios sostenidos en acciones de inconstitucionalidad y en controversias constitucionales. Indicó que no era momento

de dejar clara su postura diferente al respecto; sin embargo, manifestó su conformidad con el proyecto de la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas con las adiciones y supresiones propuestas por el señor Ministro Cossío Díaz.

Además, propuso que respecto de la nueva tesis se especificara que con ésta se abandona el criterio sustentado en la anterior, para evitar la necesidad de precisiones como la que dio lugar a esta solicitud, lo que se aceptó posteriormente por la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas.

El señor Ministro Valls Hernández señaló compartir el sentido de la consulta; sin embargo, consideró que en el texto del proyecto existe una aparente contradicción, ya que a fojas diecinueve se indica que: “Cuando el Tribunal Pleno con motivo de la solución de una controversia constitucional o de una acción de inconstitucionalidad estime que un criterio anterior debe modificarse, superarse o abandonarse, así lo podrá hacer, bastando para ello que lo señale expresamente, que aduzca los razonamientos lógico-jurídicos que lo sustenten y que éstos sean aprobados por una mayoría de por lo menos ocho votos” y, a pesar de lo anterior, en la foja veinticinco del mismo se indica que “No es óbice a lo anterior el hecho de que en la sentencia dictada en la controversia constitucional número 84/2004, no se haya señalado expresamente que se abandona el criterio

sustentado en la diversa controversia constitucional 21/2000, toda vez que al ser aprobada por once votos la primera controversia citada, implícitamente se abandonó el criterio sustentado en la diversa 21/2000”, considerando que por un lado se afirma que para modificar una jurisprudencia derivada de una controversia constitucional el Pleno debe justificar invariablemente el cambio de postura en tanto que más adelante se sostiene lo contrario, por lo que propuso matizar las consideraciones visibles en la foja diecinueve, para señalar que los argumentos justificativos que modifiquen una tesis jurisprudencial derivada de una controversia constitucional pueden ser expresos o implícitos, bastando para esto que la sentencia posterior abandone el criterio sustentado en la anterior y que sea analizado el tema expresamente en la ejecutoria respectiva en virtud de que las consideraciones jurídicas que le dan sustento, serán las que rijan hacia el futuro.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se manifestó de acuerdo con el proyecto y consideró que el problema deriva de cómo se ha construido la jurisprudencia en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, en las cuales el criterio está en la propia sentencia. Recordó que recientemente se suscitó una discusión sobre si al resolver un asunto se estaba modificando una jurisprudencia establecida en controversias constitucionales, siendo relevante al resolver un asunto de esta naturaleza precisar si se está abandonando el criterio

respectivo o si se está matizando, debiendo tomarse en cuenta que si no se considera lo resuelto en asuntos precedentes se puede generar inseguridad jurídica.

Compartió lo señalado por el señor Ministro Franco González Salas en cuanto a la necesidad de generar certeza sobre las modificaciones de criterio en acciones de inconstitucionalidad y en controversias constitucionales, pues es necesario señalar expresamente cuando tenga lugar un cambio de criterio, lo que deberá reflejarse en medios impresos y electrónicos.

La señora Ministra Luna Ramos se manifestó a favor del proyecto señalando que en cuanto a las anotaciones en las tesis respectivas es pertinente que las realice la Coordinación General de Sistematización de Tesis. Además, señaló que en relación con lo previsto en el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, éste es aplicable en lo conducente, considerando que en el caso de las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales su ley reglamentaria no permite el sistema de modificación de jurisprudencia, aunado a que en ésta únicamente se prevé el sistema derivado de los contenidos de los considerandos de una sola sentencia aprobada por cuando menos ocho votos, por lo que no se prevé la posibilidad de integrar jurisprudencia por reiteración.

Además, señaló que la obligatoriedad del artículo 43 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional se prevé únicamente para los demás tribunales y no para el Pleno de la propia Suprema Corte lo que le permite en un asunto posterior abandonar el criterio respectivo, considerando que resulta de especial relevancia que la Coordinación de Tesis realice las anotaciones respectivas.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas agradeció las observaciones y manifestó que ajustaría el proyecto en los términos solicitados.

Sometida a votación la propuesta modificada del proyecto se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño Pelayo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente en funciones Aguirre Anguiano.

El señor Ministro Presidente en funciones Aguirre Anguiano declaró que el asunto se resolvió en los términos señalados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto:

III.2 487/2009

Contradicción de tesis 487/2009 entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito al resolver los incidentes de inejecución de sentencia números 60/2009, 61/2009, 65/2009, 104/2009 y 106/2009, y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los incidentes de inejecución de sentencia 14/2007 y 6/2007. En el proyecto formulado por el señor Ministro Luis María Aguilar Morales se propuso: *“PRIMERO. Existe la contradicción de tesis a que este asunto se refiere. SEGUNDO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio redactado en la parte final de la presente resolución”*. El rubro de la tesis a que se refiere el punto resolutivo Segundo es el siguiente: *“INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE CUANDO CON ANTERIORIDAD SE HAYA DESESTIMADO OTRO INCIDENTE SIMILAR EN EL MISMO JUICIO DE GARANTÍAS, POR ESTIMAR QUE EXISTÍA UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN”*.

El señor Ministro ponente Aguilar Morales expuso una síntesis de las consideraciones de su proyecto en cuanto sustentan las propuestas contenidas en los puntos resolutivos, consistentes en que sí existe contradicción de tesis, pues mientras el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito con residencia en Ciudad Juárez considera que es improcedente el incidente de inejecución de sentencia cuando ya se ha declarado sin materia o improcedente un incidente de inejecución anterior, al

advertirse que existe un principio de ejecución de la sentencia de amparo, por haber realizado la autoridad responsable actos relacionados con el núcleo esencial de la obligación, debido a que no es jurídicamente posible resolver sobre el acatamiento de una ejecutoria de amparo cuando con antelación ya se decidió sobre el particular, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito considera que ese segundo incidente sí es procedente porque en la primera resolución únicamente se resolvió que existía un principio de ejecución de sentencia e incluso, se precisó que tal circunstancia no implicaba pronunciamiento alguno de que la sentencia protectora hubiera sido cumplida y, en consecuencia, indicó al juez del conocimiento que debería continuar requiriendo a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la citada sentencia.

Por tanto, el punto jurídico de la presente contradicción radica en determinar si es procedente el incidente de inejecución de sentencia nuevamente planteado, cuando con anterioridad se ha declarado sin materia o improcedente otro incidente de inejecución por haber existido un principio de ejecución de la sentencia de amparo, al haber realizado la autoridad responsable actos relacionados con el núcleo esencial de la obligación.

En cuanto a la solución del punto de contradicción precisó que en el considerando quinto se sustenta la

propuesta contenida en el punto resolutivo Segundo, consistente en que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio en el sentido de que si un primer incidente de inejecución de sentencia se declara sin materia o improcedente al existir un principio de ejecución, deberá ser improcedente el segundo o ulterior que se plantee con base en que no se dio cumplimiento a todos los aspectos del fallo protector, pues éstos en todo caso deben ser materia del recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia.

El señor Ministro presidente en funciones Aguirre Anguiano, sometió a la estimación del Tribunal la propuesta del proyecto.

El señor Ministro Gudiño Pelayo manifestó dudas sobre la propuesta del proyecto ya que a su juicio, la determinación que declara que en un incidente de inejecución existe un principio de ejecución no implica un pronunciamiento definitivo sobre el cumplimiento y, por tanto, la promoción de un diverso incidente de inejecución sí es procedente, pues el objetivo de su tramitación tiene como presupuesto lograr el eficaz cumplimiento de la sentencia de amparo.

Recordó que cuando se declara sin materia un incidente por existir un principio de ejecución, subsiste la obligación de las autoridades responsables de cumplir con el fallo de garantías en su totalidad a partir de los actos que se

estimaron como principio de ejecución del propio fallo, por lo que sería procedente el nuevo incidente que se promueva ante la omisión de las autoridades en el incumplimiento de la sentencia y no un recurso de queja, toda vez que éste procede ante el defectuoso cumplimiento de la sentencia, el cual consiste en un diverso supuesto, ya que pese a que no se trata de una abstención total por parte de las autoridades, no se está ante un defectuoso cumplimiento, sino de omisión en cumplir los actos que quedaron pendientes cuando se declaró que existía un principio de ejecución; por lo que si únicamente se acreditó el cumplimiento parcial de la ejecutoria de amparo, no existe duda de que en caso de que la autoridad responsable omita dar cumplimiento total a lo que se le ordenó, es procedente un nuevo incidente de inejecución, pues el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, y el hecho de que se haya declarado la existencia de un principio de ejecución, no implica un pronunciamiento definitivo en cuanto al cumplimiento de la sentencia de garantías.

Estimó que es necesario suprimir las consideraciones y tesis sobre los supuestos de inejecución cuando la sentencia de amparo ordena la devolución de determinada cantidad de dinero y la cita de la jurisprudencia de rubro: “INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA ES NECESARIO ANALIZAR EL CONTENIDO DE LA NUEVA SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR, ÚNICAMENTE

PARA VERIFICAR LA SATISFACCIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN ÉSTE, PUES ELLOS EXPLICAN CUESTIONES QUE SON DIVERSAS A LAS QUE SE TRATA LA PRESENTE CONTRADICCIÓN”, ya que para resolver es necesario revisar la nueva sentencia dictada en cumplimiento del fallo protector, pues ello se refiere a cuestiones diversas a las que refiere el punto de contradicción.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se manifestó en contra del proyecto si en términos generales se sostiene que será improcedente un nuevo incidente de inejecución por el hecho de que uno previo se haya considerado sin materia o improcedente porque hay un principio de ejecución, estimando que se estaba frente a una confusión de los conceptos “principio de ejecución” y “cumplimiento parcial de una sentencia de amparo”.

Agregó que el principio de ejecución implica que la autoridad está en vías de cumplir por lo que no se está ante un cumplimiento parcial, estimando que no advierte por qué no procederá un nuevo incidente de inejecución si existe un principio de ejecución, sin menoscabo de que puedan haber cumplimientos parciales que impliquen prácticamente el cumplimiento del fallo protector, sin compartir la propuesta general consistente en que siempre que hay principio de ejecución ya se está ante un cumplimiento parcial que permite tener por cumplido el fallo.

El señor Ministro Cossío Díaz señaló que previamente se debía verificar lo establecido en el Acuerdo General Plenario 12/2009 y su punto Tercero modificado el cual señala cuáles son las atribuciones de los Tribunales Colegiados al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de inejecución de sentencia y de repetición del acto reclamado, así como el procedimiento que seguirá este Alto Tribunal para conocer este tipo de asuntos, por lo que estimó que los Tribunales Colegiados de Circuito carecen de atribuciones para declarar improcedentes los incidentes de inejecución en supuesto diverso a aquél en el que el Juez de Distrito ha tenido por cumplida la sentencia de amparo. De estimarse que el Acuerdo General respectivo sí permite ejercer la referida atribución indicó compartir lo señalado por los señores Ministros Gudiño Pelayo y Zaldívar Lelo de Larrea.

El señor Ministro Valls Hernández indicó compartir la propuesta del proyecto ya que no es el incidente de inejecución el medio eficaz para combatir una deficiencia en el cumplimiento de una sentencia de amparo, pues el medio para tal fin es el recurso de queja, por lo que si se determina que existe un principio de ejecución la vía procedente para impugnar cualquier deficiencia en dicho cumplimiento será el recurso de queja. Además se apartó de las consideraciones relativas al precedente que se refiere de la Segunda Sala, estimando que éste no es aplicable pues aborda el supuesto

en el que el fallo protector ya ha sido acatado de manera completa sin analizar el supuesto en el que el fallo fue cumplido parcialmente. Por ende, al no existir una sentencia que resuelva el fondo de la controversia consideró que no se actualiza la institución de la cosa juzgada que se presenta cuando ya se estudio el fondo de lo planteado, por lo que señaló apartarse del proyecto cuando sustenta la improcedencia del nuevo incidente de inejecución de sentencia en la institución de cosa juzgada ya que en esa hipótesis en específico no existe una resolución que analice el fondo de la controversia considerando que la improcedencia del incidente de inejecución se actualiza no por la cosa juzgada sino por la preclusión, pues se presenta una consumación procesal según la cual una facultad procesal no puede ejercerse en dos ocasiones según la tesis de la propia Segunda Sala que lleva por rubro: “PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA”.

Por lo anterior, consideró que la razón para declarar improcedente un nuevo incidente de inejecución es por la institución de la preclusión y no por la cosa juzgada.

La señora Ministra Luna Ramos reconoció la importancia del asunto ya que en el caso de sentencias de amparo que implican el pago de algunas cantidades monetarias, se da la noticia de que ya existe un cheque para tal efecto, con lo cual se deja sin materia el incidente por existir principio de ejecución, pero al advertir que el cheque

Sesión Pública Núm. 70

Lunes 21 de junio de 2010

no contiene la totalidad del monto y promover un nuevo incidente de inejecución se determina que éste es improcedente.

Señaló la relevancia de fijar el alcance del principio de ejecución, lo que en el proyecto se considera cuando se cumple el núcleo de la sentencia aunque no se haya cumplido en su totalidad, lo que señaló ella equipara al cumplimiento parcial.

Precisó que no hay principio de ejecución cuando se dictan determinados acuerdos que no implican la devolución de recursos o cualquier acto material que no conlleve el cumplimiento del núcleo esencial.

Por lo que indicó que si se equipara el principio de ejecución al cumplimiento del núcleo esencial queda claro el proyecto pues ello implicará que ya se cumplió el fallo y el exceso o defecto sería materia de una queja.

En ese supuesto un diverso incidente de inejecución sería improcedente porque ya se determinó que existía un principio de ejecución, a menos que la nueva impugnación no derive del incumplimiento parcial ya advertido sino porque ya hubo una queja por defecto fundada y respecto de ésta no se da el cumplimiento determinado en ella.

Así, precisó que el caso que se presenta es cuando ya hubo una determinación sobre la existencia de un principio de ejecución o cumplimiento parcial porque en un asunto un Tribunal Colegiado lo dejó sin materia al estar a disposición del quejoso un cheque por cierta cantidad, sin que cubra el total de lo adeudado, por lo que deberá buscarse el cumplimiento de la parte restante en una queja por exceso o defecto.

En cambio, en el diverso juicio de amparo materia de la contradicción concedido por violación al derecho de petición y ante una respuesta de la autoridad, se presentó un cumplimiento parcial respecto de un amparo, que no debía insistirse en un nuevo incidente de inejecución pues ello podría dar lugar a revocar la resolución anterior.

Por lo que se refiere a la distinción entre vías de cumplimiento y principio de ejecución compartió la propuesta del proyecto, ya que de darse este último procederá únicamente el recurso de queja y sólo en relación con el cumplimiento de lo determinado en ésta podría proceder un nuevo incidente de inejecución.

Agregó no compartir las consideraciones visibles a partir de la foja treinta y nueve del proyecto en cuanto a que no riñe con la tesis jurisprudencial que lleva por rubro “INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA ES NECESARIO ANALIZAR EL

CUMPLIMIENTO DE LA NUEVA SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR ÚNICAMENTE PARA VERIFICAR LA SATISFACCIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS”, estimando que los principios de cumplimiento son los mismos en amparo directo y en amparo indirecto pues si el núcleo esencial está cumplido tanto en amparo directo como en amparo indirecto o el cumplimiento parcial está dado en cualquiera de esas dos vías, los problemas del defectuoso cumplimiento no serán motivo de una inconformidad ni de una inejecución por lo que si se aprueba el proyecto se debe abandonar la anterior tesis jurisprudencial.

El señor Ministro Aguirre Anguiano señaló que la distinción entre cumplimiento parcial y el principio de ejecución es compleja, coincidiendo con el criterio del señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea en cuanto a establecer un criterio único y categórico debiendo darse flexibilidad a este tipo de interpretaciones, siendo conveniente atender a las particularidades de cada asunto.

También señaló compartir lo indicado por el señor Ministro Valls Hernández en cuanto a la preclusión y por la señora Ministra Luna Ramos por lo que se refiere a la sistemática de los incidentes de inejecución y de las quejas por cumplimiento defectuoso.

Mencionó que en amparo existen una serie de remedios procesales en el cual el anterior trasciende al posterior, señalando que el recurso de queja es la última suerte que juega el quejoso llegando el momento en el que deba interponerlo por lo que se manifestó a favor del proyecto con las correcciones que se han solicitado.

El señor Ministro Silva Meza estimó no compartir el criterio absoluto que se propone, siendo necesario dejar libertad al juzgador para valorar la contumacia de la autoridad y lograr la restitución del goce de garantías individuales, siendo necesario precisar si se refiere al cumplimiento del amparo o de la queja e indicar a qué cosa juzgada se hace mención. Estimó que la Suprema Corte debe establecer un criterio amplio en el que se aborden las tesis anteriores relacionadas con la queja por exceso o defecto y la procedencia del incidente de inejecución.

Por ende, manifestó que si en el engrose se recoge lo que se ha dicho podría compartir el proyecto, aunado a no sostener que el nuevo criterio no riñe con la jurisprudencia 45/2009 de este Pleno referida por la señora Ministra Luna Ramos, dado que al parecer el criterio que se propone sí sería contrario a esta última; además, solicitó se arribe a un criterio más completo.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas consideró que el tema es bastante casuístico, señalando que

en la queja no se podrá tocar la actuación de las autoridades, aunado a que deben tomarse en cuenta las consecuencias de lo resuelto en la queja respectiva. Por ende, se manifestó a favor del proyecto con algunos matices.

El señor Ministro Aguilar Morales estimó sorprendentes las observaciones que se realizan señalando que los incidentes de inejecución y la queja parten de dos supuestos distintos, en tanto que en el primero hay absoluto incumplimiento y en el segundo supuesto sólo hay defecto o exceso en el cumplimiento.

Agregó que en el primer incidente ya se resolvió casuísticamente que existe un cumplimiento parcial y al no haber incumplimiento total se desecharía el primer incidente, por lo cual lo siguiente será analizar si existe o no un exceso o un defecto en el cumplimiento.

Señaló que el quejoso no queda en estado de indefensión pues éste tiene el recurso de queja cuando hay un incumplimiento parcial, el cual generalmente es por un defecto. Por ende, si ya se resolvió que hay un cumplimiento parcial no es factible abrir un nuevo incidente de inejecución para pronunciarse al respecto y en el recurso de queja se podrá impugnar cualquier exceso o defecto, considerando que en el primer caso el incumplimiento es absoluto y en el recurso de queja hay un incumplimiento parcial, en la

inteligencia de que en el primer caso ya se analizó que no se trate de evasivas.

Además compartió la propuesta de la señora Ministra Luna Ramos ya que si en amparo indirecto se sostiene lo anterior, lo mismo debe acontecer en amparo directo pues si en amparo indirecto existe un principio de ejecución que es el núcleo esencial, se debe reflejar en amparo directo para que consista en la reposición de la sentencia, pues con ello basta para que se advierta que ya hay un principio de cumplimiento del núcleo esencial de la sentencia de amparo directo y ya se verá en el recurso de queja si los elementos de esa nueva sentencia coinciden con los efectos que se habían fijado al tribunal responsable, por lo que aceptó modificar el proyecto en los términos solicitados por la señora Ministra Luna Ramos.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea señaló que compartiría lo indicado por el señor Ministro Aguilar Morales siempre y cuando se redactara de otra manera, pues son diametralmente opuestas las consecuencias de hablar de un principio de cumplimiento y de un cumplimiento parcial, señalando que de la explicación realizada por el señor Ministro Aguilar Morales cuando se habla de un principio de cumplimiento se refiere a un cumplimiento parcial, en lo cual estaría de acuerdo, siendo conveniente redactar el rubro de la tesis de otra manera para evitar confusiones y quede claro

que el principio de ejecución se traduce en un cumplimiento parcial.

Recordó que tal como lo sostiene el señor Ministro ponente Aguilar Morales no se puede colocar posteriormente en una situación de un incumplimiento en que proceda un incidente de inejecución, cuando ya hay un cumplimiento parcial, sino que tendría que interponerse un recurso de queja, por lo que propuso que se aclare la propuesta en ese sentido para no generar discusión.

En ese orden de ideas, propuso que se hablara claramente de un cumplimiento parcial, pues con esto se aclararía a qué casos se refiere de manera específica para no generar confusiones en la búsqueda de las tesis en medios electrónicos.

El señor Ministro Aguilar Morales indicó que se puede insistir y reiterar con mayor claridad la argumentación de la propuesta, para lograr una coincidencia entre lo señalado por el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea y lo que se sostiene en el proyecto, para que partiendo de que en la propuesta se indica que se está ante un real inicio de cumplimiento de la sentencia, se declara improcedente el primer incidente de inejecución, pues para hacer tal declaración se debía partir de la base de que había un real y verdadero cumplimiento del núcleo esencial de la sentencia, señalando que insistiría en reforzar el punto.

El señor Ministro Gudiño Pelayo propuso que el rubro respectivo quedara redactado de la siguiente manera: “INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE CUANDO CON ANTERIORIDAD SE HAYA DESESTIMADO OTRO INCIDENTE POR HABERSE DECLARADO CUMPLIDO EL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA”, lo que podría además desarrollarse en las consideraciones respectivas.

El señor Ministro ponente Aguilar Morales señaló que en relación con la preocupación de los señores Ministros Valls Hernández, Cossío Díaz y Silva Meza respecto del término “cosa juzgada”, manifestó que posiblemente no es el idóneo. Indicó que se trata de resaltar que ya se había determinado en la resolución del incidente inicial un cumplimiento del núcleo esencial de la resolución.

El señor Ministro Cossío Díaz solicitó agregar que no se está desconociendo lo dispuesto en el punto tercero del Acuerdo Plenario 12/2009, pues las reglas se refieren a la primera ocasión, por lo que queda en plenitud el Tribunal Colegiado para apreciar las condiciones del segundo incidente, con lo que estimó que se redondearía dicho punto.

La señora Ministra Luna Ramos agradeció al señor Ministro Ponente Aguilar Morales la aceptación de sus observaciones incluyendo el criterio que debe abandonarse.

El señor Ministro Franco González Salas manifestó compartir la propuesta del proyecto si se agregan las diversas observaciones que se han realizado, pudiendo estimarse que existió un principio de ejecución con cumplimiento parcial para resolver las dudas.

El señor Ministro Aguilar Morales señaló que incorporaría al engrose las observaciones que se han realizado.

En votación económica, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño Pelayo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente en funciones Aguirre Anguiano, se aprobó la propuesta modificada del proyecto, la que incluye abandonar la tesis jurisprudencial 45/2009 de rubro: “INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA ES NECESARIO ANALIZAR EL CONTENIDO DE LA NUEVA SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR ÚNICAMENTE PARA VERIFICAR LA SATISFACCIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN ÉSTE”, por lo que la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis deberá agregar la nota relativa en la versión electrónica de la referida tesis, en la inteligencia de que la redacción definitiva

Sesión Pública Núm. 70

Lunes 21 de junio de 2010

de la tesis derivada de esta resolución, cuyo texto se incluye en la sentencia correspondiente, una vez aprobado el engrose respectivo, se someterá al procedimiento administrativo que regularmente se sigue ante el Comité de Aprobación de Tesis integrado por los señores Ministros Luna Ramos y Gudiño Pelayo.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto:

III.3 6/2007

Solicitud de modificación de jurisprudencia 6/2007 formulada por el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, respecto de la número P./J. 121/2005, del rubro: “EMPLAZAMIENTO, SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, DEBE CONSIDERAR INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ENDEREZADOS CONTRA EL LAUDO, Y NO REMITIR LA DEMANDA A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PARA QUE CONOZCA DE ELLOS”. En el proyecto formulado por el señor Ministro Luis María Aguilar Morales se propuso: *“PRIMERO. Es procedente la solicitud de modificación de tesis de jurisprudencia formulada por el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materia de*

Sesión Pública Núm. 70

Lunes 21 de junio de 2010

Trabajo del Segundo Circuito. SEGUNDO. Es fundada la solicitud de modificación de la tesis jurisprudencial a que esta resolución se refiere. TERCERO. Deben prevalecer con carácter jurisprudencial los criterios sustentados por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la tesis redactada en el último considerando de esta resolución”.

El señor Ministro ponente Aguilar Morales expuso una síntesis de las consideraciones de su proyecto consistentes en que es fundada la solicitud de modificación de la tesis jurisprudencial y deben prevalecer con carácter jurisprudencial los criterios sustentados por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: “EMPLAZAMIENTO. SI EN UN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL DEBE CONSIDERAR INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ENDEREZADOS CONTRA EL LAUDO Y NO REMITIR LA DEMANDA A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PARA QUE CONOZCA DE ELLOS”.

En síntesis sostuvo que en el proyecto se proponen dos criterios: el primero consistente en que cuando se trata de una sentencia como un laudo que ya es definitivo, si el

emplazamiento es correcto no se consideren inoperantes los conceptos de violación, sino que se haga su análisis respecto del laudo mismo y, el segundo, que si esto acontece de esta manera, deberá remitirse la demanda a un Tribunal Colegiado de Circuito para que sea éste el que analice las violaciones que se atribuyen al laudo respectivo.

La señora Ministra Luna Ramos manifestó no compartir plenamente la propuesta, recordando que el problema se da cuando existiendo el dictado de un laudo una de las partes, generalmente la demandada, acude al juicio de amparo aduciendo que no fue debidamente emplazada, lo que le permite ser equiparada a una persona extraña a juicio para acudir a la vía indirecta; sin embargo, al analizar el concepto de violación relativo a la falta de emplazamiento lo declara infundado al ser correcto éste, restando analizar los conceptos de violación respecto del laudo correspondiente, en tanto que el proyecto propone que si existe un medio ordinario de defensa el propio juez de Distrito después de declarar infundado dicho concepto, declare inoperantes los conceptos de violación relacionados con la sentencia respectiva, y si no hay medio ordinario de defensa deberá declararse incompetente para que quien conozca de la validez del laudo sea un Tribunal Colegiado de Circuito.

Señaló que el primer supuesto no se da en materia laboral, por lo que no cabe al no ser combatibles los laudos con un medio ordinario defensa. En cuanto al segundo

supuesto se dividiría el conocimiento de la contienda, además, se trata de una trampa procesal fuerte, pues el quejoso pudo haber perdido el plazo para acudir al amparo directo para impugnar el laudo, y con base en el respectivo concepto de violación sobre falta de emplazamiento logrará que se envíe la demanda al respectivo Tribunal Colegiado de Circuito a pesar de ser extemporáneo su planteamiento.

Además, la oportunidad de la demanda sería materia del amparo indirecto.

Recordó que en amparo se ha sostenido que cuando se tiene problemas por materia o territorio debe conocer quien tiene la competencia preponderante, ejemplificando cuando se impugnaba una clausura y un arresto, pues aun cuando hubiera un problema penal como es el arresto, el Juez de Distrito en Materia Administrativa conocería de ambos actos de autoridad; así como el supuesto en el que la ejecución se lleva a cabo en diversos sitios.

En el caso concreto, ante la falta de emplazamiento del tercero extraño por equiparación conforme a lo previsto en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, indicó que le da al juez de Distrito la posibilidad de que conozca de este juicio pues el citado numeral prevé que los jueces de Distrito son competentes para conocer de los siguientes actos y de inmediato los enumera, por lo que indicó que el citado numeral faculta al juez para conocer del juicio de amparo

indirecto no sólo respecto del emplazamiento sino de otros actos que pudieran estar ligados a éste.

El señor Ministro Presidente en funciones Aguirre Anguiano señaló que ya se han establecido excepciones a la continencia de la causa para efectos de resolver conflictos competenciales.

El señor Ministro Aguilar Morales indicó que en el proyecto no se exime al Tribunal Colegiado de Circuito del estudio de la oportunidad de la demanda respecto del laudo impugnado. Además, en cuanto a la división del conocimiento del asunto, lo cierto es que se examina simplemente en la vía que se ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales respecto del tercero extraño, mandando a la vía correcta el análisis para el Tribunal Colegiado al que le corresponde uniinstancialmente, pues de lo contrario se provocaría una segunda oportunidad para que un Tribunal Colegiado de Circuito conozca en revisión del tema.

Estimó que en todo caso serían inoperantes los conceptos de violación si la resolución no es definitiva y si no tiene recurso se remitirá a un Tribunal Colegiado de Circuito.

El señor Ministro Franco González Salas se manifestó a favor del proyecto solicitando se ajuste el párrafo relativo al artículo 4º que se encuentra a fojas treinta y siete del mismo.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se pronunció a favor del proyecto ya que la tesis vigente genera injusticias para los gobernados, estimando que el criterio que se propone no prejuzga sobre la procedencia del amparo directo contra el laudo respectivo ya que si se considera que el emplazamiento fue ilegal, procede otorgar el amparo y si se considera que fue ilegal pasará al Tribunal Colegiado el que deberá analizar, entre otros datos, si fue promovido dentro del plazo legal y con ello no se obliga al juzgado de Distrito al análisis de un laudo en el supuesto de que el emplazamiento fuera legal, estimando que si se promovió en tiempo el amparo contra el laudo y también se impugna la falta de emplazamiento, lo correcto es que el asunto una vez declarada la validez del emplazamiento se remita al Tribunal Colegiado de Circuito para que conozca del laudo correspondiente, sin que tampoco del emplazamiento pudieran conocer órganos de esta naturaleza pues ello impediría en la vía directa ofrecer pruebas respecto de los defectos o ausencia del emplazamiento.

Hizo referencia a que en materia laboral el criterio sería aplicable por analogía y, por mayoría de razón, a todos los demás procesos judiciales, por lo que estimó que las afirmaciones relativas a la definitividad no sobran pues se estaría fijando un precedente respecto de qué se hace cuando un demandado alega que no fue emplazado y se

acota a un círculo que no incluye a las personas extrañas a juicio.

Agregó que es conveniente queden las consideraciones relativas al supuesto en el que pudiera existir medio ordinario de defensa, recordando que la contradicción versa sobre el caso del tercero extraño a juicio que materialmente sí es parte dentro del juicio y no a la persona extraña a éste.

El señor Ministro Gudiño Pelayo recordó que lo peculiar del asunto es que en una sola demanda se impugnan actos que corresponden a vías distintas, estimando que la del tercero extraño equiparado a persona extraña debe analizarse en amparo indirecto en tanto que la del laudo debe estudiarse en amparo directo, considerando correcta la propuesta del proyecto.

Además, señaló que el criterio no es únicamente aplicable a la materia laboral sino a los juicios biinstanciales como en el ámbito civil.

La señora Ministra Luna Ramos manifestó que indicó que este criterio permitiría impugnar el laudo en cualquier tiempo, aunado a que en amparo directo no se pueden ofrecer pruebas y únicamente en amparo indirecto se podría para demostrar la falta o deficiencias del emplazamiento.

La señora Ministra Sánchez Cordero se manifestó a favor del proyecto y consideró que la parte final de la tesis que se propone indica que no se prejuzgará sobre la procedencia del amparo contra el laudo, expresando dudas sobre lo indicado en la tesis en cuanto a que: “la declaratoria de incompetencia no prejuzga sobre la procedencia del amparo, respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda, pues al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado el análisis respectivo porque es el órgano competente para pronunciarse sobre este aspecto”, ante lo cual el señor Ministro ponente Aguilar Morales indicó que ajustaría la redacción del proyecto.

Sometida a votación la propuesta modificada del proyecto, se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño Pelayo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente en funciones Aguirre Anguiano, en la inteligencia de que la redacción definitiva de la tesis derivada de esta resolución, cuyo texto se incluye en la sentencia correspondiente, una vez aprobado el engrose respectivo, se someterá al procedimiento administrativo que regularmente se sigue ante el Comité de Aprobación de Tesis integrado por los señores Ministros Luna Ramos y Gudiño Pelayo. La señora Ministra Luna Ramos votó en contra.

Sesión Pública Núm. 70

Lunes 21 de junio de 2010

El señor Ministro Presidente en funciones Aguirre Anguiano declaró que el asunto se resolvió en los términos señalados, convocó al Tribunal Pleno para la sesión pública que tendrá verificativo el martes veintidós de junio a las once horas y concluyó la presente sesión a las doce horas con cuarenta minutos.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente en funciones Sergio Salvador Aguirre Anguiano y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.